

Informe jurídico 0152/2008

La consulta plantea si resulta conforme con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la publicación de las listas de admitidos en los colegios públicos y privados concertados, de manera desglosada.

La fijación de criterios desglosado, y su posterior publicación en los tablones de anuncios, la misma supone una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”. Y permitirá que se comuniquen a terceros datos especialmente protegidos, tales como los relativos a la minusvalía, pues si en el criterio 1.4 relativo a la discapacidad un Solicitante tiene x puntos, esto es debe, a que en él o en alguno de sus hijos concurre alguna causa de discapacidad.

Siendo el dato de minusvalía un dato relativo a la salud de las personas resulta de aplicación el artículo 7.3 de la Ley Orgánica que dispone “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga la Ley o el afectado consienta expresamente”

En consecuencia, la publicación de los criterios desglosados, lleva implícita la comunicación a terceros de datos especialmente protegidos, por tanto, para que dicha publicación sea ajustada a la Ley Orgánica, deberá de haberse obtenido previamente el consentimiento expreso de cada uno de los afectados.

Asimismo el Decreto 6/2007, de 26 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado de enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados que viene a desarrollar y aplicar en la Comunidad Autónoma de Canarias la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación, determina en su artículo 14 que “Los centros docentes publicarán en el tablón de anuncios, en el plazo que se determine, la relación de alumnos admitidos y no admitidos, con especificación de la puntuación obtenida una vez aplicados los criterios previstos en los artículos 9 y 10 del presente Decreto”

El artículo anteriormente transcrito no habilita la publicación desglosada de la puntuación obtenida por cada criterio, sino que determina que se publicará la puntuación total, después de aplicar los criterios fijados en los artículos 9 y 10 del mencionado Decreto. Asimismo dicho Decreto, no sería suficiente, desde el prisma de la jerarquía normativa, dado que no tiene valor de Ley, para acordar la publicación de datos especialmente protegidos.

Por último, a efectos informativos indicar que la Agencia Española de Protección de Datos, en el informe de 6 de septiembre de 2007, analiza la posibilidad de hacer constar, no los criterios desglosados, sino las causas de exclusión en las listas de no admitidos señalando al efecto que :

“No obstante, la comunicación de datos planteada, contenida en la notificación de la resolución del procedimiento de admitidos, deberá considerarse como cesión de datos de carácter personal, toda vez que el artículo 3 i) de la Ley Orgánica define aquélla como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”. Si lo que pretenden es la publicación de las mencionadas listas en tableros de anuncios de las dependencias del Ayuntamiento, la misma supone una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con la cesión de datos, el artículo 11.1 de la Ley dispone que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Este consentimiento sólo se verá exceptuado en los supuestos contemplados en el artículo 11.2, cuyo apartado a) prevé la posible cesión inconsentida de los datos cuando una norma con rango de Ley así lo disponga.

En el supuesto que se plantea, si las bases de la convocatoria para la admisión en la escuela infantil, prevén la publicación de las listas de admitidos y excluidos, incluidas las causas de la exclusión, los

participantes en las mismas habrán dado su consentimiento previo a la citada cesión de sus datos cuando aceptaron las bases y efectuaron su solicitud de participación en las mismas. En ese caso, podría entenderse implícitamente prestado el consentimiento con la aceptación de las bases de la convocatoria y sería correcta la publicación de los referidos datos tal y como haya quedado reflejado en la misma convocatoria.

No obstante, lo dispuesto anteriormente debe ponerse en conexión con la obligación de notificar a los interesados las resoluciones administrativas que afecten a sus derechos e intereses, que establece el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En dicho precepto y en el artículo siguiente (artículo 59) se regulan taxativamente los supuestos en que tal notificación se producirá de forma distinta a la notificación personal, bien mediante la publicación de las resoluciones, bien mediante su publicación en el tablón de edictos o de anuncios. Por tanto, procede analizar si, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, la previsión contenida en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, puede considerarse norma habilitadora de la cesión, mediante publicación, de los datos personales a que se refiere la Corporación consultante en su escrito.

De acuerdo con el mencionado precepto, referido a la “Práctica de la notificación”:

“Artículo 59. Práctica de la notificación.

(...)

6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o



medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos”.

Sin embargo, la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su artículo 61, relativo a la “Indicación de notificaciones y publicaciones”, dispone que: “Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento”.

En conclusión, la publicación de las causas de exclusión será adecuada a la Ley Orgánica 15/1999, sí en las bases de la convocatoria se hubiese establecido como se haría pública los admitidos y excluidos, haciendo referencia a las causas de exclusión. No obstante, sí el órgano consultante considera que la publicación de las causas de exclusión lesiona derechos e intereses legítimos podrá optar por aplicar lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, antes transcrito”